

0075/2021

Examinada su solicitud de informe, remitida a este Gabinete Jurídico, referente al Proyecto de Real Decreto sobre las funciones de la sanidad de la Guardia Civil y la determinación de la aptitud psicofísica de su personal, cúmpleme informarle lo siguiente:

I

Dicho proyecto de norma, como su denominación indica, tiene como finalidad la regulación de las funciones de la Sanidad de la Guardia Civil y la determinación de la aptitud psicofísica de su personal, y desde una perspectiva de protección de datos, esta última finalidad puede a su vez bifurcarse en dos: por una lado la vigilancia de la salud de sus miembros desde la perspectiva de la protección social a que estos tienen derecho (asistencia sanitaria, protección de los riesgos laborales), y por otro el proyecto regula también los procedimientos para la determinación de la aptitud del personal de la Guardia Civil para que estos puedan llevar a cabo la alta tarea que la Constitución y las leyes les encomiendan de proteger los derechos y libertades de todos. Así, el art. 1 de la ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil, establece que tiene por objeto establecer el régimen del personal de la Guardia Civil, y específicamente la carrera profesional de sus miembros y todos aquellos aspectos que la conforman, con el fin de que este Cuerpo de Seguridad del Estado de naturaleza militar, *esté en condiciones de cumplir con la misión que el artículo 104.1 de la Constitución encomienda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las funciones que le atribuyen los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, que lo desarrollan, así como las misiones de carácter militar que se le asignen*, de acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica y en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional. Dicha ley, en su art. 7, establece (entre otras reglas de comportamiento) que los guardias civiles deben mantener una disposición permanente para defender a España y proteger el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos (apartado 1.1), harán un empleo legítimo de la fuerza, con un uso gradual y proporcionado de la misma, siendo la persuasión y la fuerza moral sus primeras armas (apartado 1.4), estarán preparados para afrontar con valor, abnegación y espíritu de servicio las situaciones que se derivan de sus misiones (1.5), evitarán todo comportamiento que pueda comprometer el prestigio del Cuerpo o la eficacia del servicio que presta a la sociedad, (1.13) y se prepararán para alcanzar *el más alto nivel de competencia profesional y para desarrollar la capacidad de adaptarse a diferentes misiones y circunstancias*. Por otra parte, en su art. 15, la ley

29/2014 señala las funciones que deberán llevar a cabo los guardias civiles: operativas, técnicas, logísticas, administrativas y docentes en el marco de la seguridad pública o de las misiones de carácter militar que se le puedan encomendar. Estas funciones conllevan tanto unos derechos de los guardias civiles como unos deberes personales y profesionales para estar siempre preparados para llevar a cabo las mismas. Así, la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, les reconoce, entre otros, (i) los derechos a la prevención de riesgos laborales y protección de la salud, de manera que la Administración General del Estado deberá promover las medidas necesarias para garantizar, en lo posible, la seguridad y salud del personal de la Institución al utilizar los medios y equipos puestos a su disposición, con especial atención a los riesgos específicos que se deriven de sus funciones (art. 31) y (ii) a la protección social, incluyendo la asistencia sanitaria y prestaciones en caso de enfermedad e incapacidad. Ello supone, a su vez, que la ley orgánica 11/2007 citada también establezca que los guardias civiles están obligados a someterse a los reconocimientos psicofísicos necesarios para determinar su aptitud para el servicio (art. 23), lo que reitera la ley 29/2014 de manera más extensa, de modo que dichos reconocimientos de la aptitud psicofísica han de servir tanto para la protección social del personal (adecuando su situación a los puestos de trabajo en los que puedan servir según sus condiciones psicofísicas en virtud de los correspondientes exámenes de salud) cuanto para la protección de los ciudadanos, que tiene derecho a que las personas que puedan portar armas en defensa de sus derechos estén en las condiciones idóneas para el cumplimiento de las funciones para las que la ley les concede dicha facultad.

II

No menor es también el reconocimiento explícito en la ley del derecho a la protección de los datos personales de los guardias civiles, de manera genérica, y reforzada para los datos de carácter médico y psicológico.

Tal y como señala la Exposición de Motivos de la ley orgánica 11/2007, el desarrollo de las especialidades en el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas que corresponden a los Guardias Civiles se ha realizado en el Título II de la misma partiendo de la premisa de que, salvo las excepciones y puntualizaciones que expresamente contenga la Ley, dicho catálogo es coincidente con el del resto de ciudadanos. Así, el art. 5.3 señala que los datos relativos a los miembros de la Guardia Civil estarán sujetos a la legislación sobre protección de datos de carácter personal, y a su vez el art. 57 de la ley 29/2014 recoge específicamente que los resultados de los reconocimientos médicos y pruebas psicológicas (a que se refiere a su vez dicho artículo) quedarán salvaguardados por el grado de confidencialidad que la legislación en materia sanitaria les atribuya. Ello es una llamada expresa a la ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y

documentación clínica, con las garantías que ello conlleva para los datos personales reservados (médicos y psicológicos) del personal de la guardia civil. Así lo recoge, por otra parte, el proyecto de Real Decreto sometido a informe, en su art. 3, al reconocer que los datos que se obtengan en los reconocimientos y pruebas que en él se regulan estarán sometidos a lo previsto en el RGPD, la LOPDGDD y a la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, ya citada. Serán, por tanto, aplicables a la protección de los datos personales médicos y psicológicos las garantías que se contienen en dicha ley, así como la regulación específica que al respecto se contenga en la ley 29/2014.

III

Comenzando ya con el contenido del Proyecto, en su relación con la normativa de protección de datos, hay que poner de manifiesto que esta AEPD ha tenido ocasión de informar sobre una versión anterior de esta norma, y sobre alguna norma de desarrollo de esta. En concreto, en el Informe 153/2018 esta AEPD informó el Proyecto de Real Decreto sobre la determinación de la aptitud psicofísica del personal de la Guardia Civil, y en el Informe 377/2016 se informó sobre un proyecto de Orden Ministerial por el que se establece el modelo y las normas reguladoras del expediente de aptitud psicofísica del personal de la Guardia Civil.

Ya hemos mencionado el art. 3 del Proyecto, que recoge las especificaciones de estos tratamientos de datos personales, reafirmando que los datos que se obtengan de los reconocimientos y pruebas que tengan lugar en el marco de la norma se rigen por el RGPD, la LOPDGDD y por la ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Acertadamente, el párrafo final del art. 3.1 señala que se tendrá en cuenta especialmente el principio de minimización de datos, de forma que sean adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados.

Nos encontramos pues, tal y como señalábamos en nuestro Informe 377/2016, citado, ante datos de salud, resultado de los reconocimientos que se produzcan, así como de aquellos reconocimientos que se puedan realizar para determinar si existe una insuficiencia de condiciones psicofísicas.

El art. 5.1.a) RGPD consagra el principio de licitud en el tratamiento de los datos personales, de modo que los tratamientos han de contar siempre con una base jurídica de las señaladas en el art. 6 RGPD. Entre las bases que podrían legitimar el tratamiento de los datos de aptitud psicofísica a que se refiere el proyecto de norma encontramos el apartado e): cuando el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento,

pues la conservación y el mantenimiento de la aptitud psicofísica es de evidente interés público tanto para el efectivo mantenimiento de la seguridad ciudadana como para que los ciudadanos puedan confiar en que sus fuerzas de seguridad están preparadas para las obligaciones que le impone la ley, como la c): el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. En este caso, la legislación, como hemos visto, impone a la Administración General del Estado el deber de velar por la salud y seguridad del personal de la Guardia Civil, en los términos ya citados, así como de acuerdo con la normativa específicamente aplicable de prevención de riesgos laborales. Pero la ley 29/2014 impone asimismo a la Administración la *obligación* de declarar el retiro (“se declarará de oficio”) cuando existe insuficiencia de condiciones psicofísicas que implique incapacidad permanente para el ejercicio de las funciones propias del Cuerpo (art. 94.1.c) ley 29/2014).

No cabe descartar tampoco como base legitimadora la propia del apartado b): el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales, por cuanto la relación jurídica que une al solicitante de acceso a un proceso selectivo (como el aspirante a ingreso en los centros de formación de la Guardia Civil) puede considerarse incluida en dicha base (véase Informe de esta AEPD 86/2020).

En definitiva, existe base jurídica legitimadora de los tratamientos de datos personales.

IV

Pero el tratamiento de datos personales de salud necesita no sólo dicha base legitimadora, sino que los datos de salud tienen un tratamiento específico, y en concreto el art. 9.1 del RGPD determina que queda prohibido el tratamiento de datos personales relativos a la salud, si bien en su apartado 2 establece que dicha prohibición no será de aplicación cuando concorra alguna de las circunstancias de levantamiento de la prohibición que se contienen en él.

Cabe considerar aplicable en primer lugar la letra h) del art. 9.2: cuando el tratamiento es necesario para fines de medicina preventiva o laboral, *evaluación de la capacidad laboral del trabajador*, diagnóstico médico, *prestación de asistencia o tratamiento de tipo sanitario o social*, o *gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social*, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros o en virtud de un contrato con un profesional sanitario y sin perjuicio de las condiciones y garantías contempladas en el apartado 3 de dicho art. 9 RGPD. Y el apartado 3 citado del RGPD a su vez afirma que los datos personales a que se refiere el apartado 1 podrán tratarse a los fines citados en el apartado 2, letra h), cuando su tratamiento sea realizado por un *profesional sujeto a la obligación de secreto*

profesional, o bajo su responsabilidad, de acuerdo con el Derecho de la Unión de los Estados miembros o con las normas establecidas por los organismos nacionales competentes, *o por cualquier otra persona sujeta también a la obligación de secreto* de acuerdo con el Derecho de la Unión o de los Estados miembros o de las normas establecidas por los organismos nacionales competentes.

En definitiva, dentro de las causas que permiten el levantamiento de la prohibición del tratamiento de estos datos especialmente sensibles se encuentra la necesidad de “evaluar la capacidad del trabajador”, así como para fines de medicina preventiva o laboral, o diagnóstico médico. Dicho tratamiento deberá ser llevado a cabo bajo condiciones de secreto profesional, ya directamente por quien está sujeto al mismo ya bajo su responsabilidad. Y la propia ley orgánica 11/2007 ya establece en su art. 19 que los miembros de la Guardia Civil están sujetos a la legislación general sobre secretos oficiales y materias clasificadas, y tienen el deber de guardar secreto profesional y el debido sigilo respecto de aquellos hechos o informaciones no clasificadas de los que hayan tenido conocimiento en el ejercicio de sus funciones. Igualmente, al remitirse a la ley 41/2002, esta dispone que la persona que elabore o tenga acceso a la información y la documentación clínica está obligada a guardar la reserva debida (art. 2.7), o que el personal que accede a los datos de la historia clínica en el ejercicio de sus funciones queda sujeto al deber de secreto (art. 16.6), sin olvidar que el propio art. 5 de la LOPDGDD determina que los responsables y encargados del tratamiento de datos así como *todas las personas* que intervengan en cualquier fase de este estarán sujetas al deber de confidencialidad al que se refiere el artículo 5.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679. Ello, por supuesto, es aplicable a todas las personas que tratan los datos personales con las finalidades previstas en la norma, y específicamente a todos los componentes de los órganos médico-periciales regulados en la sección 1ª del Capítulo V, incluyendo al órgano instructor.

También podría considerarse aplicable el apartado b) del art. 9.2, por cuanto que este permite el tratamiento cuando es necesario para el cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de derechos específicos del responsable del tratamiento o del interesado en el ámbito del Derecho laboral y de la seguridad y protección social, en la medida en que así lo autorice el Derecho de la Unión de los Estados miembros o un convenio colectivo con arreglo al Derecho de los Estados miembros que establezca garantías adecuadas del respeto de los derechos fundamentales y de los intereses del interesado.

Incluso podría estimarse aplicable, dada la alta función que cumple la Guardia Civil en el mantenimiento de la seguridad ciudadana y el interés esencial en proteger a los propios interesados, que portan armas, de posibles alteraciones físicas o psicológicas que afecten a sus funciones, así como en proteger a los ciudadanos de esas posibles alteraciones que puedan afectar a las capacidades de los funcionarios de los cuerpos que portan armas, el

apartado g), esto es, cuando el tratamiento es necesario por razones de un interés público esencial, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros, que debe ser proporcional al objetivo perseguido, respetar en lo esencial el derecho a la protección de datos y establecer medidas adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales del interesado.

El art. 3 recoge estas circunstancias adecuadamente en sus apartados 1 y 2.

En cuanto al apartado 3 habría que corregir la redacción para reflejar que los derechos a que hace referencia se contienen en el Capítulo II del Título III de la ley orgánica 3/2018 (no sólo “en el Capítulo II”).

V

El art. 6.2 del proyecto recoge que los órganos de psicología informarán *a quien ostente el mando de unidad* de nivel comandancia o superior, y al órgano de Sanidad de quien dependa el miembro de la Guardia Civil afectado, *sobre la **conveniencia de adoptar medidas específicas*** sobre el personal a sus órdenes que cause baja temporal, por motivos psiquiátricos, así como en aquellos supuestos en los que, sin estar de baja médica, se esté bajo tratamiento psiquiátrico o psicofarmacológico. Informarán igualmente a los mandos antes citados sobre la conveniencia de suspender las medidas específicas implementadas, en el momento en que hubieran desaparecido las causas que las motivaron. El apartado 3 establece que dichas medidas lo son con finalidad preventiva en aquellos casos en que por la naturaleza de las circunstancias que concurran en los miembros de la Guardia Civil se pueda prever racionalmente la posibilidad de conductas que supongan un riesgo contra el propio guardia civil o terceras personas, o que puedan generar graves consecuencias.

Esta AEPD considera que dicho tratamiento de datos por el Jefe de Unidad estaría justificado, por las razones que ya se han expuesto anteriormente. El apartado h) del art. 9.2 RGPD recoge que los datos de salud pueden tratarse por razones de medicina preventiva, bajo la responsabilidad de alguien sujeto a deber de secreto profesional. Del mismo modo, el apartado b) permite el tratamiento de dichos datos para el cumplimiento de obligaciones en el ámbito de la seguridad y la protección social.

El art. 22.4 de la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, aunque si bien no aplicable directamente a la Guardia Civil, sus principios inspirarán la normativa específica que se dicte para regular la protección de la seguridad y la salud de los guardias civiles (ver su art. 3.2), establece que el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención serán informados de las *conclusiones* que se deriven

de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus funciones en materia preventiva. A su vez el art. 14.1 establece que los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones públicas respecto del personal a su servicio. El art. 31 de la ley orgánica 11/2007 concreta este derecho de los guardias civiles.

La norma específica que en desarrollo del art. 3.2 de la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales regula estas cuestiones en el seno de la Guardia Civil es el Real Decreto 179/2005, de 18 de febrero, sobre prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil. La Disposición Final Tercera del proyecto de norma sometido a informe modifica esta norma y da una nueva redacción al art. 6 del Real Decreto, con la siguiente redacción:

«Artículo 6. Vigilancia de la salud.

La Dirección General de la Guardia Civil garantizará una adecuada vigilancia de la salud de sus miembros en función de los riesgos profesionales a los que estén expuestos. Esta vigilancia se llevará a cabo respetando la dignidad de la persona, la confidencialidad de toda la información relacionada con el estado de salud y garantizando que los datos que deriven de esa vigilancia no podrán ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del afectado. Tendrá carácter periódico y, oídas las asociaciones profesionales representativas, de acuerdo con el cauce de participación y representación de los guardias civiles previsto en la disposición final tercera de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del personal de la Guardia Civil, se determinará su obligatoriedad para aquellos supuestos en los que la realización de los reconocimientos médicos y psicológicos sean necesarios para verificar si el estado de salud de este personal puede constituir un peligro para él mismo o para las demás personas relacionadas con la función que desempeña.

Estos reconocimientos serán realizados por la Sanidad de la Guardia Civil o bien, mediante la contratación de un servicio de prevención ajeno.

Los resultados de los reconocimientos serán comunicados a cada uno de los interesados. El contenido de la información médica de carácter personal que se derive de los reconocimientos se limitará al personal médico y autoridades que lleven a cabo la vigilancia de la salud, sin que pueda facilitarse a otras personas sin consentimiento expreso del afectado.

*No obstante, lo anterior, los que ostenten el mando de unidad nivel Comandancia o similar y sus órganos de prevención serán informados de las **conclusiones** que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del interesado para el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención, para que puedan desarrollar correctamente sus funciones en materia preventiva».*

En estos dos supuestos citados el Jefe de Unidad tiene acceso a determinada información médica de los guardias a su mando. Pues bien, considerándose justificada la necesidad de adoptar las medidas oportunas para que dichos guardias civiles no sean un peligro para sí mismos o para otros, el conocimiento de la situación de salud de dichos guardias por el Jefe de Unidad ha de ser el mínimo indispensable (principio de minimización del tratamiento, art. 5 RGPD y art. 3.1, segundo párrafo, del proyecto sometido a informe) para adoptar las medidas oportunas para el fin pretendido. Así, en el art. 6, los órganos de psicología deberán informar al Jefe de Unidad exclusivamente de lo que sea imprescindible para que este adopte las medidas necesarias. Así, no sería necesario por ejemplo informarle de la enfermedad del Guardia civil, sino de las características de esta en relación con las funciones que realiza el guardia civil y cómo puede afectar a dichas funciones, los peligros posibles etc. Del mismo modo, acertadamente, el art. 6 del RD 179/2005, en la redacción propuesta, tan sólo autoriza a informar al mando de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos en relación con las aptitudes para el desempeño del puesto de trabajo, del mismo modo que figura en el art. 22.4 de la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.

VI

El art. 11 del proyecto establece la posibilidad de que los reconocimientos médicos y las pruebas psicológicas y físicas sean realizados por los órganos correspondientes de la Sanidad de la Guardia Civil y de los servicios de atención psicológica, y personal habilitado como evaluador de pruebas físicas o a través de acuerdos de encomienda de gestión contratos o convenios. Esta AEPD no ve inconveniente en principio siempre que las relaciones con quienes resulten ser encargados de tratamiento se rijan, aparte de por el correspondiente contrato o acuerdo de servicios etc., realizando el correspondiente acuerdo de encargo del tratamiento conforme al artículo 28 RGPD. Recientemente, si bien en el ámbito laboral, el Tribunal Supremo, en sentencia de la Sala 4ª 629/2021, de 15 de junio de 2021, ha considerado que la verificación del estado de salud del trabajador, si bien ha de llevarse a cabo a cargo de personal médico, no se establece en el Estatuto de los Trabajadores (aplicable a dicho caso) cortapisa o restricción para que se lleve a cabo a través de un control médico a través de una empresa externa.

VII

El art. 57 de la ley 29/2014 está dedicado al expediente de aptitud psicofísica, y establece (además del art. 23 de la ley orgánica 11/2007) supuestos en que el reconocimiento médico es obligatorio para el guardia civil. Así, cuando están destinados a detectar los estados de intoxicación etílica y el consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas; cuando se dirijan a determinar si existe insuficiencia de condiciones psicofísicas, o cuando lo determine fundadamente el Jefe de Unidad. En general, la determinación de la condición psicofísica como condición que permite al guardia civil cumplir sus funciones es, como hemos visto, tanto una obligación de la Administración en relación con la prevención de la salud del guardia civil, como un interés de la sociedad en la comprobación del estado de salud de quienes han de defenderle para garantizar un uso adecuado de las potestades que la propia sociedad les concede.

Estos tratamientos de datos estarían pues, legitimados por las mismas bases jurídicas expuestas de manera extensa hasta aquí.

VIII

El art. 17.2, letra a), del proyecto se dedica a establecer los efectos de la no superación de pruebas de los aspirantes en los procesos selectivos. El segundo y tercer párrafo de dicho apartado se refieren a los órganos de selección de la siguiente manera:

Los órganos de selección que se creen para el desarrollo de dichos procesos selectivos tendrán acceso a la información que conste en el expediente de aptitud psicofísica de los aspirantes que posean la condición de guardia civil o de militar profesional de las Fuerzas Armadas y se presenten a dichos procesos, salvaguardando en todo caso lo previsto en el artículo 3 sobre protección de datos.

Los aspirantes que, habiéndose presentado a un proceso selectivo, tengan dictaminada una limitación temporal o permanente de condiciones psicofísicas que sea incompatible con la realización de las pruebas físicas que conlleve el proceso o, a su vez, fuera incompatible con la superación del correspondiente plan de estudios, serán declarados no aptos en el proceso selectivo.

Esta AEPD, en su informe 153/2018 sobre el anterior Proyecto de Real Decreto sobre la determinación de la aptitud psicofísica del personal de la Guardia Civil, determinó que:

Por otro lado, el artículo 11.2 prevé el acceso por parte de los órganos de selección que se creen para el desarrollo de los procesos selectivos contemplados en el mismo a “la información que conste en el expediente

de aptitud psicofísica de los aspirantes que posean la condición de guardia civil o de militar profesional de las Fuerzas Armadas y se presenten a dichos procesos, salvaguardando en todo caso lo previsto en el artículo 4 sobre protección de datos”, añadiendo la disposición final quinta que “para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11.2 de este real decreto, el Subsecretario de Defensa pondrá a disposición de la Dirección General de la Guardia Civil los expedientes de aptitud psicofísica del personal profesional de tropa y marinería que se presente a los procesos selectivos para el ingreso a la enseñanza de formación, por acceso directo, a la escala de cabos y guardias”.

En este caso cabe entender que dicho tratamiento de datos estaría amparado en la misma base jurídica legitimadora que el tratamiento de los datos que realiza la Jefatura de Personal de la Guardia Civil por cuanto existiría un interés público esencial en el conocimiento por parte del responsable del tratamiento de aquellas circunstancias, incluso anteriores en el tiempo, que puedan determinar el comportamiento, la aptitud psicofísica o la salud, en general, de quienes, como ya se ha mencionado anteriormente, tienen por objetivo hacer cumplir la ley y pueden ser portadores de armas.

En cuanto al acceso a la información contenida en dichos expedientes de aptitud psicofísica, hay que reiterar lo ya ha expuesto anteriormente acerca del contenido de la información. En virtud del principio de minimización no toda la información contenida en los expedientes debería servir para todos los procesos de gestión de personal. Por ello, el acceso de las diferentes personas que deban intervenir en los procesos de gestión de personal deberá estar limitado a la información necesaria para la gestión de dichos procesos, sin que pueda entenderse que en todo caso dicho acceso lo será a toda la información contenida en el expediente de aptitud psicofísica.

El texto del proyecto actual sometido a informe es idéntico al referido en el Informe señalado, pero las referencias han de realizarse al art. 17.2 y a la Disposición final sexta del actual proyecto.

IX

En el apartado 3 del art. 17 del proyecto se establece, en su último inciso, que *el resultado de los reconocimientos de detección de los consumos mencionados [consumo perjudicial de alcohol o del consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas] será puesto en conocimiento de quien ostente el mando de unidad del personal afectado.*

La MAIN señala que:

En relación a dichos reconocimientos, se prevé que el órgano médico encargado de realizar los controles preventivos comunique a los jefes de unidad, sobre el personal a sus órdenes, los resultados que hubieran arrojado resultado positivo. Y estos resultados en el sentido único de si lo han sido por consumo perjudicial de alcohol (habitual y excesivo) o de drogas. En este sentido se ha considerado necesario que los jefes de unidad conozcan esta vicisitud por la repercusión y consecuencias que, sobre la planificación y nombramiento del servicio, pudieran tener dichos resultados como, por ejemplo, establecer alguna limitación temporal para la conducción de todos o algún tipo de vehículos para la ejecución de servicios nocturnos, custodia de determinados decomisos o de atención al público.

Por ello, se ha considerado necesario incidir en que la comunicación al jefe de unidad sobre este dato (positivo en un control) pudiera tener consecuencias únicamente operativas vinculadas directamente sobre el desempeño propio de las funciones que desempeñan los guardias civiles en su puesto de trabajo.

Esta AEPD comparte los razonamientos expresados en la MAIN, y considera que el tratamiento de dichos datos personales, como ya se ha expuesto reiteradamente en este informe, viene justificado por las razones previstas en los arts. 9.2.b), g) y h) RGPD, y en última instancia por un evidente interés público.

Ahora bien, no parece que en el texto del art. 17.3 del proyecto se recojan las limitaciones y las finalidades a que se hacen adecuadamente referencia en la MAIN. Esta AEPD considera que debería insertarse en el texto del proyecto la regulación prevista en la MAIN, de manera que se establezca en la norma las finalidades del tratamiento por el Jefe de Unidad cuando se le comunica un dato personal de una persona a su mando de cuyo examen resulta consumo perjudicial de alcohol o del consumo de drogas tóxicas, estupeficientes o sustancias psicotrópicas. En definitiva, qué consecuencias puede extraer de dicho conocimiento.

X

El art. 27.2 del proyecto establece que la resolución del expediente de aptitud psicofísica se notificará al afectado, y cuando suponga una incapacidad permanente que conlleve el pase a retiro se publicará en el Boletín Oficial de Defensa. La MAIN no establece cuál es la base jurídica que hace necesaria dicha publicación en el Boletín Oficial de Defensa.

Esta Agencia, en su Informe 019/2018, referente al Proyecto de Orden Ministerial por la que se ordena el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa, luego promulgada como Orden DEF/446/2018, de 26 de abril, ya tuvo oportunidad de pronunciarse al respecto, en relación con datos personales con

similar protección en el RGPD. Así, la AEPD sostenía, lo que ahora cabe reiterar:

Pues bien, hay que recordar que el denominado “uso oficial” está también sujeto a la normativa de protección de datos personales, de manera que no cualquier miembro de las Fuerzas Armadas o de la Guardia Civil, aunque tenga acceso irrestricto –según la norma comentada- a la totalidad del ejemplar del Boletín, ha de tener acceso al texto completo de notificaciones o resoluciones relativas a una persona concreta y específica (distinta de ella misma) en la que se traten datos personales susceptible de protección. Por ejemplo, en la sección III, Personal, o en la VI, Administración de Justicia, del BOD se publican anuncios y notificaciones de, por ejemplo, (i) pases de la situación de suspensión de funciones a la de servicio activo como consecuencia de resoluciones judiciales de jueces de instrucción en virtud de lo establecido en el artículo 88.2, párrafo segundo, de la ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil, o (ii) se publican, de manera literal, los fallos de las sentencias de la sala quinta del Tribunal Supremo, o del Tribunal Militar Central, en relación a personal militar o de la Guardia Civil, en recursos contencioso-disciplinarios militares, en las que por ejemplo, de su mera lectura se conoce el nombre de la persona afectada, la falta que cometió, la sanción que se le impuso, y a mayor abundamiento, que a la postre dicho fallo fue estimatorio (o desestimatorio) y que se anula (o confirma) la sanción por no ser (o sí) los hechos constitutivos de infracción disciplinaria alguna.

En definitiva, el proyecto no especifica la razón de la publicación, o la forma de publicación, de las resoluciones que dan lugar al retiro por incapacidad permanente. Dicha publicación, de ser necesaria por establecerlo así la base jurídica para ello, deberá cumplir en todo caso la normativa de protección de datos personales, y entre ellas, cabe recordar, la Disposición Adicional séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD). El art. 94 de Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil no requiere tal publicación, que sí requiere sin embargo el art. 8.4 del Reglamento de adquisición y pérdida de la condición de guardia civil y de situaciones administrativas del personal de la Guardia Civil, aprobado por Real Decreto 728/2017, de 21 de julio. Ahora bien, lo que requiere dicho artículo es la publicación del pase a la situación de retiro, no la especificación de que se realiza por incapacidad permanente. Por ello, el principio de minimización de datos y proporcionalidad determinaría que, aunque fuese necesario la publicación del pase a retiro, no se especificase la causa cuando ello suponga un tratamiento de datos sensibles que pueda resultar desproporcionado a la finalidad del tratamiento, que sería comunicar el pase a retiro en sí mismo, y no la causa de ello.